



**RESOLUCIÓN No. SSPD - 20144010023965 DEL 08/07/2014**  
**POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN**

**EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO,**

en ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y en el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012 y

**CONSIDERANDO:**

**I. ANTECEDENTES**

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual *"se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones"*, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones o de retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios para asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

Que el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012, por medio del cual se reglamentó la Ley 1176 de 2007, estableció que *"La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1176 de 2007. Para estos efectos, verificará que los municipios y distritos hayan dado cumplimiento a los requisitos que se establecen en el artículo 9 del presente decreto y 10 para el caso de los prestadores directos de alguno de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, en el año calendario inmediatamente anterior."*

Que la Superintendente de Servicios Públicos, mediante Resolución No. SSPD 20111300032265, del 21 de octubre de 2011 delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con los decretos 1040 de 2012 y 1639 de 2013; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo C.P.A.C.A., para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el municipio de PROVIDENCIA, del departamento de ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, es de categoría 5 y como prestador directo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, a 31 de diciembre de 2012, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 3° y 5° del Decreto 1639 de 2013.

**II. DE LA RESOLUCIÓN DE DESCERTIFICACIÓN**

Que mediante Resolución No. SSPD 20144010007545, del 20 de marzo de 2014 la SSPD decidió DESCERTIFICAR al municipio de PROVIDENCIA, del departamento de ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, por no haber cumplido los siguientes criterios previstos en los artículos 3° y 5° del Decreto 1639 de 2013.

a) Reporte al SUI del Acuerdo Municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, el cual deberá estar expedido de

conformidad con la Ley 1450 de 2011 o la norma que la modifique, complemente o sustituya. En caso de no poder acreditar el criterio de la forma descrita, podrá:

- a) Reportar en el SUI el formato Balance Subsidios y Contribuciones de la vigencia a certificar, o,
- b) Reportar en el FUT en la categoría gastos de inversión el pago por concepto de subsidios en la vigencia a certificar

b) Reporte al SUI del formato Acto de Aprobación de Tarifas, expedido antes de la fecha máxima de cargue para la certificación de la respectiva vigencia, según los servicios prestados, de conformidad con la normatividad expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios relacionada con el cargue de información al sistema.

c) Cumplimiento del 30% de la obligación de reportar tarifas aplicadas y la facturación al SUI.

d) Acta de concertación de puntos y lugares de muestreo de conformidad con los lineamientos expedidos por el Gobierno Nacional sobre la materia. En caso de no poder acreditar el criterio de la forma descrita, podrá: (ii) Reportar al SUI la solicitud suscrita por el municipio prestador directo y radicada ante la autoridad sanitaria competente, que contenga la propuesta para la concertación de los lugares y puntos de muestreo para el control y vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano en la red de distribución, antes de la fecha máxima de cargue para la certificación de la respectiva vigencia, según los servicios prestados.

## **2.1 Notificación de la Resolución No. SSPD 20144010007545 del 20 de marzo de 2014**

Para efectos de notificar la Resolución No. SSPD 20144010007545, del 20 de marzo de 2014 se envió citación al señor alcalde del municipio de PROVIDENCIA del departamento de ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA mediante el oficio No. SSPD 20144010161011 del 20 de marzo de 2014, enviado por correo certificado el 28 de marzo de 2014, advirtiéndole que en caso de no comparecer personalmente, se notificaría la decisión mediante aviso conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Transcurrido el término para que el representante legal del ente territorial compareciera a notificarse personalmente del contenido de la Resolución SSPD No. 20144010007545, del 20 de marzo de 2014, sin que ello ocurriera, se procedió a enviar el respectivo aviso de notificación mediante el oficio No. SSPD 20144010191591, del 7 de abril de 2014. De acuerdo a la información remitida por la empresa SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. éste documento fue entregado el 14 de abril de 2014 en la Alcaldía Municipal, por lo tanto y de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, la notificación se considera surtida al día siguiente de su entrega en el lugar de destino.

Ahora bien, el señor Arturo Robinson Dawkins, en su calidad de alcalde del municipio de PROVIDENCIA, del departamento de ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, mediante documento radicado en esta entidad bajo los números SSPD 20145290215962, del 30 de abril de 2014 y 20145290225012, del 05 de mayo de 2014, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. SSPD 20144010007545, del 20 de marzo de 2014.

## **III. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN**

### **3.1 Verificación de los requisitos de forma**

El artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que, para efectos de ser admitidos y resueltos; los recursos de reposición deben interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad e indicar el nombre y la dirección del recurrente.

De conformidad con lo anterior, revisado el escrito de reposición se observa que este fue presentado por el alcalde del municipio de PROVIDENCIA, del departamento de ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, quien de conformidad con el artículo 314 de la C.P. es considerado el representante legal y por lo tanto era el funcionario competente para interponerlo, además se confirma que fue presentado dentro del término legal, que en él se sustentan de forma concreta los motivos de inconformidad y se indicó la dirección para efectos de recibir notificaciones.

Según lo expuesto, los escritos radicados con los Nos. SSPD 20145290215962, del 30 de abril de 2014 y el 20145290225012, del 05 de mayo de 2014, reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 77 del C.P.A.C.A, por lo tanto se procederá a efectuar el análisis de fondo del recurso.

### 3.2 Argumentos del recurrente

Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte del alcalde municipal:

*"Al respecto, es importante resaltar que la Alcaldía municipal inició sus operaciones como prestador de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo el 23/08/2012, a través de la Unidad de servicios públicos Domiciliarios, la cual fue creada el mediante Decreto 063 del 23 de agosto de 2012 para tal fin, toda vez, que la anterior prestadora de servicios públicos de la isla, llamada Administración pública Cooperativa Providence and Santa Catalina Clean and With Fresh Water ESP, no cumplió con las obligaciones contractuales, por lo que se le dio por terminado el contrato 053 de 2006 el 22 de agosto de 2012, atendiendo las sugerencias de la Superintendencia de Servicios Públicos en visita del 1,2 y 3 de febrero de 2012 y por el subdirector de gestión empresarial del Viceministerio de aguas en visita del 23 de abril de 2012, donde posteriormente conceptuó sobre la terminación del contrato.*

*Posteriormente se realizó la inscripción del Registro único de Prestadores - RUPS, donde se diligenció el 3 de diciembre de 2012, la cual fue rechazada ya que los documentos soportes no llegaron a la Superintendencia de Servicios Públicos en físico, razón por la cual se procedió a crear una nueva solicitud para la creación del RUPS el 13 de junio de 2013, una vez fue rechazado el RUPS anterior, aprobándose el 16 de agosto de 2013.*

*A la postre, el 14 de agosto de 2013 se solicita mediante mesa de ayuda 271898 la habilitación de los formatos del SUI para ser diligenciados, pero la Superintendencia señala que el RUPS ya fue aprobado y que internamente enviarán por correo al agente encargado para que pueda efectuar la modificación en el aplicativo, indicando que si en horas de la tarde no le aparece en estado aprobado se comunique nuevamente. Como se ve en el pantallazo siguiente, el RUPS fue aprobado dos días después el 16 de agosto.*

*Una vez fue aprobado el RUPS, se procedió a verificar la habilitación de los cargues en el SUI, pero como no fueron habilitados, se procedió a enviar nuevamente una mesa de ayuda como puede ser verificado siguiendo el consecutivo o requerimiento de mesa de ayuda No. 272713 BC, por medio de la cual se solicitó la habilitación de los tópicos con sus respectivos formatos para realizar el reporte de información a la página del SUI, ya que el RUPS había sido aprobado el día 16 de agosto, y se enfatizó lo siguiente: "Lo anteriores solicitado con urgencia ya que el reporte de dicha información es vital para la certificación de la alcaldía para lo cual hay un plazo de reportar información hasta el 30 de agosto". Sin embargo, la Superintendencia solo se pronunció hasta el 02 de octubre de 2014.*

*Por lo tanto, pese a la oportuna solicitud de habilitación de los formatos del SUI, antes de la fecha de vencimiento para la certificación, que de acuerdo con el Decreto 1639 el 31 de julio de 2013 fue del 30 de agosto de 2013, la Superintendencia resuelve vulnerar el **DEBIDO PROCESO** que le asiste al MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, decidiendo NO CERTIFICAR al municipio de PROVIDENCIA del Departamento de SAN ANDRÉS en relación con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, desconociendo de plano que la solicitud ante la mesa de ayuda solo fue atendida hasta el 02 de octubre de 2013, como se prueba a continuación con los siguientes soportes magnéticos.*

*(...)*

*Los derechos analizados, obligatoriamente deben interpretarse en su conjunto, ya que con un solo acto de cualquier autoridad pueden afectarse a la vez varios derechos fundamentales, siendo el derecho al debido proceso administrativo uno de los más vulnerados. Ha sido consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, cuyo texto es el siguiente:*

*(...)*

*En la sentencia T-061 de 2.002, la Corte Constitucional fija los siguientes criterios con relación a este derecho fundamental.*

*"La Constitución Política, en su artículo 29, prescribe que "el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". En virtud de tal disposición, se reconoce el principio de legalidad como pilar fundamental en el ejercicio de las funciones por parte de las autoridades judiciales y administrativas, razón por la cual están obligadas a respetar las formas propias de cada juicio y a asegurar la efectividad de todas aquellas normas que permitan a los administrados presentar, solicitar y controvertir pruebas, y que en últimas, garanticen el ejercicio efectivo del derecho de defensa.*

*De esta manera, el debido proceso se define como la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley.*

Al respecto, la Corte ha determinado que "Corresponde a la noción de debido proceso, el que se cumple con arreglo a los procedimientos previamente diseñados para preservar las garantías que protegen los derechos de quienes están involucrados en la respectiva relación o situación jurídica, cuando quiera que la autoridad judicial o administrativa deba aplicar la ley en el juzgamiento de un hecho o una conducta concreta, lo cual conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una obligación o sanción...

(...) En esencia, el derecho al debido proceso tiene la función de defender y preservar el valor de la justicia reconocida en el preámbulo de la Carta Fundamental, como una garantía de la convivencia social de los integrantes de la comunidad nacional... "(Sentencia C-214 de 1994 M.P. Antonio Barrera Carbonell).

Ahora bien, el debido proceso administrativo como derecho fundamental se manifiesta a través de un conjunto complejo de principios, reglas y mandatos que la ley le impone a la Administración para su ordenado funcionamiento (entre otros, se destacan las disposiciones previstas en el artículo 209 de la Constitución y en el capítulo I del Título I del C.C.A., referente a los principios generales de las actuaciones administrativas), por virtud de los cuales, es necesario notificar a los administrados de las actuaciones que repercutan en sus derechos, otorgarles la oportunidad de expresar sus opiniones, y de presentar y solicitar las pruebas que demuestren sus derechos. Actuaciones que, en todos los casos, deben ajustarse a la observancia plena de las disposiciones, los términos y etapas procesales descritas en la ley.

(...)

**La Resolución No. SSPD - 20144010007545 DEL 20/03/2014., vulnera el principio de legalidad.**

Por cuanto sin haberse resuelto de fondo la solicitud de habilitación de los formatos del SUI, se resolvió expedir acto administrativo sancionatorio, violando con ello el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, que dispone.

"ARTICULO 35. **ADOPCION (sic) DE DECISIONES.** Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares.

**En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite.**

Cuando el peticionario no fuere titular del interés necesario para obtener lo solicitado o pedido, las autoridades negarán la petición y notificarán esta decisión a quienes aparezcan como titulares del derecho invocado, para que puedan hacerse parte durante la vía gubernativa, si la hay (...).

Lo anterior, por cuanto como ya se dijo, se expidió la resolución sancionatoria sin haber atendido hasta la fecha la solicitud de reversión del formulario, lo cual demuestra que, **si la solicitud de soporte ante la mesa de ayuda, hubiera sido atendida oportunamente, seguramente la decisión proferida hubiese sido la de CERTIFICAR al municipio de PROVIDENCIA del Departamento de SAN ANDRÉS en relación con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico**, por cuanto dicho soporte de carácter técnico fue legalmente solicitado antes de la firmeza del acto administrativo, y por ende, antes de que se pusiera fin a la actuación administrativa y asumiera carácter ejecutivo la decisión, conforme al C.C.A.

Al respecto, resulta importante señalar que el principio de legalidad, propio del estado de derecho y, por ende, aplicable a todo el ordenamiento normativo donde se haga uso del poder punitivo, impone que, para la aplicación de una sanción, exista un precepto en donde se describa claramente la conducta reprochable (tipicidad), previo análisis científico de todas las pruebas pertinentes, decretadas y/o aportadas a la investigación.

En efecto, uno de los principios esenciales en el derecho sancionador es el de la legalidad, según el cual las conductas sancionables no sólo deben estar descritas en norma previa (tipicidad) sino que, además, deben tener un fundamento legal, por lo cual su definición no puede ser delegada en la autoridad administrativa. (CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1161 de 6 de septiembre de 2000. Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero).

Además, es claro que el principio de legalidad implica también que la sanción debe estar predeterminada ya que debe haber certidumbre normativa previa sobre la sanción a ser impuesta pues las normas que

*consagran las faltas deben estatuir "también con carácter previo, los correctivos y sanciones aplicables a quienes incurran en aquéllas".*

*Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:*

*"La sanción administrativa, como respuesta del Estado a la inobservancia por parte de los administrados de las obligaciones, deberes y mandatos generales o específicos que se han ideado para el adecuado funcionamiento y marcha de la administración entre otros, y consecuencia concreta del poder punitivo del Estado, no debe ser ajena a los principios que rigen el derecho al debido proceso. Por tanto, debe responder a criterios que aseguren los derechos de los administrados.*

*En este sentido, se exige, entonces, que la sanción esté contemplada en una norma de rango legal -reserva de ley-, sin que ello sea garantía suficiente, pues, además, la norma que la contiene debe determinar con claridad la sanción, o por lo menos permitir su determinación mediante criterios que el legislador establezca para el efecto. Igualmente, ha de ser razonable y proporcional, a efectos de evitar la arbitrariedad y limitar a su máxima expresión la discrecionalidad de que pueda hacer uso la autoridad administrativa al momento de su imposición. En otros términos, la tipificación de la sanción administrativa resulta indispensable como garantía del principio de legalidad."*

*De esta manera se tiene que en el derecho administrativo sancionatorio rige el principio de legalidad de las sanciones, conforme al cual toda infracción debe ser castigada de conformidad con normas preexistentes al hecho que se atribuye al sancionado."*

### **3.3. De las pruebas relacionadas en el recurso.**

Con los documentos radicados Nos. SSPD 20145290215962 del 30 de abril de 2014 y 20145290225012 del 05 de mayo de 2014, por medio de los cuales se sustentó el recurso de reposición, no se anexaron pruebas.

## **IV. ANÁLISIS DE FONDO**

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta superintendencia procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

Analizado el recurso de reposición que aquí se decide, se advierte por esta entidad que el alegato del representante del ente municipal se puede resumir en que en su concepto esta SSPD, con la expedición de la Resolución No. 20144010007545 del 20 de marzo de 2014, vulneró el derecho al debido proceso y el principio de legalidad del municipio de Providencia.

Para sustentar su dicho arguye que habiendo pedido oportunamente la solicitud de habilitación de los formatos del SUI antes de la fecha de vencimiento para la certificación (30 de agosto de 2013), se descertificó al municipio "desconociendo de plano que la solicitud ante la mesa de ayuda solo fue atendida hasta el 02 de octubre de 2013"; recalcando y enfatizando que "sin haberse resuelto de fondo la solicitud de habilitación de los formatos del SUI, se resolvió expedir acto administrativo sancionatorio, violando con ello el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo. (...), por cuanto como ya se dijo, se expidió la resolución sancionatoria sin haber atendido hasta la fecha la solicitud de reversión del formulario, lo cual demuestra que, si la solicitud de soporte ante la mesa de ayuda, hubiera sido atendida oportunamente, seguramente la decisión proferida hubiese sido la de CERTIFICAR al municipio de PROVIDENCIA del Departamento de SAN ANDRÉS en relación con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, por cuanto dicho soporte de carácter técnico fue legalmente solicitado antes de la firmeza del acto administrativo, y por ende, antes de que se pusiera fin a la actuación administrativa y asumiera carácter ejecutivo la decisión, conforme al C.C.A".

Respecto de los argumentos expuestos por el impugnante este ente de control debe señalar lo siguiente:

### **Frente a la violación al debido proceso:**

El artículo 29 de la Constitución Política, consagra el derecho al debido proceso en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas; ahora bien, esta garantía procesal reconocida a la persona (natural o jurídica, pública o privada), tiene como finalidad que no pueda resultar sancionada o perjudicada por decisiones de la autoridad que desconozcan las oportunidades establecidas por la ley para intervenir y defenderse.

Ahora bien, teniendo como pilar de las actuaciones administrativas, como la que nos ocupa, el respeto por el debido proceso, haremos referencia a lo que se ha denominado debido proceso administrativo; al respecto, la Honorable Corte Constitucional al pronunciarse frente a este tema, señaló: *"Así, a partir de una concepción del procedimiento administrativo que lo entiende como un conjunto de actos independientes pero concatenados con miras a la obtención de un resultado final que es la decisión administrativa definitiva, cada acto, ya sea el que desencadena la actuación, los instrumentales o intermedios, el que le pone fin, el que comunica este último y los destinados a resolver los recursos procedentes por la vía gubernativa, deben responder al principio del debido proceso. Pero como mediante el procedimiento administrativo se logra el cumplimiento de la función administrativa, el mismo, adicionalmente a las garantías estrictamente procesales que debe contemplar, debe estar presidido por los principios constitucionales que gobiernan la función pública y que enuncia el canon 209 superior. Estos principios son los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad"*.<sup>1</sup>

Así mismo, el máximo Tribunal Constitucional de nuestro país, en Sentencia T-2.897.231 de 2011, señaló que son garantías del debido proceso administrativo, entre otras, las siguientes: (a) el derecho a conocer el inicio de la actuación, (b) a ser oído durante todo el trámite, (c) a ser notificado en debida forma, (d) a que se adelante por autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias de cada juicio, (e) a que no se presenten dilaciones injustificadas, (f) a gozar de la presunción de inocencia, (g) a ejercer los derechos de defensa y contradicción, (h) a presentar pruebas y a controvertir aquellas que aporte la parte contraria, (i) a que se resuelva en forma motivada la situación planteada, (j) a impugnar la decisión que se adopte y a promover la nulidad de los actos que se expidan con vulneración del debido proceso.

Con fundamento en el señalado y revisado el procedimiento llevado a cabo por esta superintendencia, el cual terminó con la descertificación del municipio de Providencia, se estableció que el proceso adelantado en el marco de la certificación para la administración de los recursos del SGP-APSB, para la vigencia 2012, cumplió a cabalidad con los presupuestos exigidos por la norma constitucional y jurisprudencia, acerca de las garantías que aseguran el debido proceso, a saber:

Esta entidad con oficio SSPD 20134010140741 del 27 de marzo de 2013, se informó al alcalde de Providencia, las obligaciones a cargo de la administración municipal frente al cargue de información al SUI para los procesos de certificación en coberturas mínimas (vigencia 2012) y SGP-APSB (vigencia 2012), además de hacerle referencia a los requerimientos realizados por la Procuraduría General de la Nación en las Directivas 015 de 2005 y 05 de 2008; así mismo con el citado oficio se le informó al burgomaestre que el diagnóstico de su municipio para el proceso de certificación SGP-APSB. Adicional a ello, con oficio SSPD 20134010466981 del 25 de julio de 2013, se remitió al ente municipal un nuevo diagnóstico con la información reportada al SUI por el ente territorial antes del 3 de junio de 2013, es decir, al municipio se le comunicó oportunamente del procedimiento y requisitos para obtener la certificación en mención.

Así mismo, el auto de apertura del proceso SGP-APSB, vigencia 2012, número SSPD 20134010015936 del 20 de septiembre de 2013, comunicado al municipio con oficio SSPD 20134010617021 de la misma fecha.

De otra parte, esta entidad le brindó la oportunidad al municipio de ser oído antes de tomar la decisión, así como se le permitió participar en el proceso de certificación, dentro del cual pudo solicitar y aportar las pruebas que le interesaran para efectos de lograr la aludida certificación en el SGP-APBS, lo cual se realizó a través del auto de pruebas No. SSPD 20134010019156 del 15 de octubre de 2013, el que le fue comunicado al municipio mediante oficio No. SSPD 20134010682961 del 17 de octubre de 2013. En el auto de pruebas se dispuso lo siguiente:

#### CONSIDERANDO:

Que la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, mediante el Auto No. SSPD 20134010015936 del 20 de septiembre de 2013, de apertura a la actuación administrativa para adelantar el proceso de certificación para la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico del municipio de PROVIDENCIA del Departamento de ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

Que para adelantar el trámite de la certificación del municipio de PROVIDENCIA se hace necesario verificar el cumplimiento de los criterios señalados en el artículo 5 del Decreto 1838 de 2013, debido que revisado el SUI se encontró que el MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS, identificado con RD 28171, realizó la solicitud de inscripción en el RUPPS en diciembre de 2012, y actualizó dicho registro el 13 de junio de 2013, estos documentos se encuentran en estado rechazado y aprobado, respectivamente. No obstante la aprobación del RUPPS, realizada con el oficio No. 20131800401321 del 4 de julio de 2013, el 6 de septiembre de 2013 la empresa en mención no tenía habilitados los formularios y formularios que le permitieran reportar la información y los documentos solicitados en el artículo 5 en mención.

Que de conformidad con lo expuesto,

#### RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECRETAR de oficio las siguientes pruebas:

1. Oficiarse al Coordinador del Grupo SUI de esta Superintendencia para que informe al Grupo de Certificación e Información de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo de esta Entidad la relación con la habilitación de los formularios de Acto de aprobación de tarifas, tarifas aplicadas y facturación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia 2012 correspondientes a los meses de agosto e diciembre para el MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS y las acciones adelantadas tanto por el Grupo SUI como por el municipio de Providencia- San Andrés para habilitar los formularios en mención.

<sup>1</sup> Corte Constitucional. Sentencia C -610 del 1 de agosto 2012. MP Luis Ernesto Vargas Silva

El anterior procedimiento se efectuó, en aras de salvaguardar el debido proceso del municipio de Providencia, atendiendo que esta SSPD era consciente que sólo hasta el 13 de junio de 2013 había solicitado la actualización de su inscripción en el RUPS, y por consiguiente debía verificar por qué a 06 de septiembre de 2013, no tenía habilitados los formatos y formularios para que acreditara el cumplimiento de los criterios señalados en el Decreto 1639 de 2013.

Fue así como de cara a tal requerimiento, el Grupo SUI de esta entidad dio respuesta al auto probatorio antes referido con memorando SSPD 20131800074913 del 02 de noviembre de 2013.

Ahora bien, una vez expedida la Resolución de descertificación No. SSPD 20144010007545, del 20 de marzo de 2014, este acto administrativo fue debidamente motivado, para tal efecto y con el fin de dar respuesta a los argumentos presentados por el ente municipal con su recurso, considera oportuno este Despacho hacer alusión al análisis que realizó esta entidad en el acto atacado, para demostrar que no se vulneró el debido proceso del municipio de Providencia por parte de este ente de control.

Para tal efecto, se revisará nuevamente la información que remitió el Grupo SUI dentro del periodo probatorio:

Al respecto, nos permitimos informarle que una vez verificada en la base de datos se encontró el siguiente cuadro de estado de información para los formatos y formularios correspondientes:

ID	FORMATO	PERIODICIDAD	PERIODO	ESTADO	AÑO	FECHA DE HABILITACION
26171	ACTO DE APROBACIÓN DE TARIFAS ACUEDUCTO PDF	EVENTUAL	0	PENDIENTE	2012	18/07/13
26171	ACTO DE APROBACIÓN DE TARIFAS ALCANTARILAD O PDF	EVENTUAL	0	PENDIENTE	2012	18/07/13
26171	ACTO DE APROBACIÓN DE TARIFAS ASEO PDF	ANUAL	1	PENDIENTE	2012	18/07/13

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

26171	FACTURACION ACUEDUCTO - IGAC	MENSUAL	9	PENDIENTE	2012	24/09/13
26171	FACTURACION ACUEDUCTO - IGAC	MENSUAL	8	PENDIENTE	2012	24/09/13
26171	FACTURACION ACUEDUCTO - IGAC	MENSUAL	12	PENDIENTE	2012	24/09/13
26171	FACTURACION ACUEDUCTO - IGAC	MENSUAL	11	PENDIENTE	2012	24/09/13
26171	FACTURACION ACUEDUCTO - IGAC	MENSUAL	10	PENDIENTE	2012	24/09/13
26171	FACTURACION ALCANTARILLADO - IGAC	MENSUAL	8	PENDIENTE	2012	24/09/13
26171	FACTURACION ALCANTARILLADO - IGAC	MENSUAL	9	PENDIENTE	2012	24/09/13
26171	FACTURACION ALCANTARILLADO - IGAC	MENSUAL	10	PENDIENTE	2012	24/09/13
26171	FACTURACION ALCANTARILLADO - IGAC	MENSUAL	11	PENDIENTE	2012	24/09/13
26171	FACTURACION ALCANTARILLADO - IGAC	MENSUAL	12	PENDIENTE	2012	24/09/13
26171	23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO	MENSUAL	8	PENDIENTE	2012	24/09/13
26171	23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO	MENSUAL	10	PENDIENTE	2012	24/09/13
26171	23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO	MENSUAL	9	PENDIENTE	2012	24/09/13
26171	23.1. FACTURACION COMERCIAL DE ASEO	MENSUAL	11	PENDIENTE	2012	24/09/13
26171	23.1. FACTURACION	MENSUAL	12	PENDIENTE	2012	24/09/13

	COMERCIAL DE ASEO					
26171	FORMATO TARIFAS APLICADAS ACUEDUCTO	MENSUAL	12	PENDIENTE	2012	24/09/13
26171	FORMATO TARIFAS APLICADAS ACUEDUCTO	MENSUAL	10	PENDIENTE	2012	24/09/13
26171	FORMATO TARIFAS APLICADAS ACUEDUCTO	MENSUAL	9	PENDIENTE	2012	24/09/13
26171	FORMATO TARIFAS APLICADAS ACUEDUCTO	MENSUAL	8	PENDIENTE	2012	24/09/13
26171	FORMATO TARIFAS APLICADAS ACUEDUCTO	MENSUAL	11	PENDIENTE	2012	24/09/13
26171	FORMATO TARIFAS APLICADAS ALCANTARILLADO	MENSUAL	12	PENDIENTE	2012	24/09/13
26171	FORMATO TARIFAS APLICADAS ALCANTARILLADO	MENSUAL	11	PENDIENTE	2012	24/09/13
26171	FORMATO TARIFAS APLICADAS ALCANTARILLADO	MENSUAL	10	PENDIENTE	2012	24/09/13
26171	FORMATO TARIFAS APLICADAS ALCANTARILLADO	MENSUAL	9	PENDIENTE	2012	24/09/13
26171	FORMATO TARIFAS APLICADAS ALCANTARILLADO	MENSUAL	8	PENDIENTE	2012	24/09/13
26171	2. APLICACIÓN TARIFARIA ASEO	MENSUAL	112	PENDIENTE	2013	24/09/13

26171	2. APLICACIÓN TARIFARIA ASEO	MEUSUAL	111	PENDIENTE	2014	24/09/13
26171	2. APLICACIÓN TARIFARIA ASEO	MEUSUAL	110	PENDIENTE	2015	24/09/13
26171	2. APLICACIÓN TARIFARIA ASEO	MEUSUAL	109	PENDIENTE	2016	24/09/13
26171	2. APLICACIÓN TARIFARIA ASEO	MEUSUAL	108	PENDIENTE	2017	24/09/13

La fecha de corte de la consulla es el día 31 de Octubre de 2013.

Como puede observarse del reporte rendido por el Grupo SUI al revisar la plataforma, el formato para cargar el acto aprobación de tarifas para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, estaba habilitado desde el 18 de julio de 2013, para que el municipio de Providencia cargara el acto correspondiente; es decir, el ente territorial contaba con la herramienta necesaria para cumplir con ese criterio, antes que venciera el plazo fijado por el Decreto 1639 de 2013 (30 de agosto de 2013), sin embargo, no reportó el acto aprobación de tarifas, ya que los cargues que figuran para los servicios de acueducto y aseo, tienen fecha 07 de mayo de 2014 nótese:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
ANIO	IDC	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT Y D	SERVIC	TOPICO	PERIOD	PERIOD	FORMATO	J/APLICA	ESTADO	ACTO	FECHA	FECHA DE CERTIFICACION
3/2012	26171	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	80010302	ACUEDUCO	Comercio	EVENTUA	EVENTUA	ACTO DE APROBACION DE TARIFAS ACUEDUCTO PDF	Cargue M	Certificado	Resolución 2013-12-2	2014-05-07 10:54:57	
5/2012	26171	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	80010302	ALCANTARILLADO	Comercio	EVENTUA	EVENTUA	ACTO DE APROBACION DE TARIFAS ALCANTARILLADO PDF	Cargue M	Pendiente	Resolución 2013-12-2	00:00:00	
7/2012	26171	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	80010302	ASEO	Comercio	ANUAL	Anual	ACTO DE APROBACION DE TARIFAS ASEO PDF	Cargue M	Certificado	Resolución 2013-02-2	2014-05-07 11:10:37	
4/2013	26171	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	80010302	ASEO	Comercio	ANUAL	Anual	ACTO DE APROBACION DE TARIFAS ASEO PDF	Cargue M	Pendiente	Resolución 2014-01-30	00:00:00	
5/													

No obstante, respecto de los formatos de facturación y tarifas aplicadas para los tres servicios, estos se habilitaron el 24 de septiembre de 2013, es decir en un término posterior al plazo máximo fijado en el Decreto 1639 de 2013; sin embargo, los cargues de información por parte del municipio los efectuó el 12 de diciembre de 2013 es decir, extemporáneamente, ya que tal y como este Despacho lo señaló en la Resolución de descertificación recurrida, esos cargues se realizaron tres meses después de la habilitación de los formatos y luego de dos meses a la fecha en que el Grupo SUI le comunicó al ente territorial sobre la habilitación de dichos formatos.

Es oportuno aclarar que para esta entidad, es aplicable en este caso el principio general del derecho según el cual nadie está obligado a lo imposible, toda vez que era evidente que el municipio no podía cargar la información al SUI antes del 30 de agosto de 2013. La extemporaneidad que se predica es porque no cargó dentro de un término prudencial la información requerida una vez se habilitaron los formatos, como quedó visto.

En estas condiciones, no son válidos los argumentos del ente municipal cuando afirma que *“si la solicitud de soporte ante la mesa de ayuda, hubiera sido atendida oportunamente, seguramente la decisión proferida hubiese sido la de CERTIFICAR al municipio de PROVIDENCIA (...), por cuanto dicho soporte de carácter técnico fue legalmente solicitado antes de la firmeza del acto administrativo, y por ende, antes de que se pusiera fin a la actuación administrativa y asumiera carácter ejecutivo la decisión, conforme al C.C.A”*.

Ahora, el acto administrativo de descertificación fue notificado al interesado de conformidad con los presupuestos de Ley, para lo cual se le brindó al ente territorial la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción y por consiguiente, de impugnar la decisión, al advertirle que contra la decisión adoptada procedía el recurso de reposición, recurso que aquí se decide.

Así pues, resulta claro que la Resolución No. SSPD SSPD 20144010007545 del 20 de marzo de 2014, no es un acto violatorio del debido proceso, y por el contrario, constituye una muestra evidente de su desarrollo y de la aplicación de los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción que rigen las actuaciones administrativas.

En consecuencia, al no encontrarse vulneración de norma alguna aplicable a la materia, el argumento del municipio NO está llamado a prosperar.

#### Frente a la violación del principio de legalidad como sanción.

De cara a las aseveraciones del recurrente que el procedimiento que se surte para la certificación en el SGP-APSB, es un procedimiento sancionatorio, esta SSPD reitera que, como quedó señalado en el numeral anterior, el proceso de certificación es una actuación administrativa que tiene como fundamento el debido proceso administrativo.

Ahora bien, es preciso señalar que el proceso de certificación es una actuación que se adelanta en estricto cumplimiento de las disposiciones legales teniendo a cada municipio de manera independiente y para cada ente territorial se analizó el cumplimiento de requisitos para efectos de obtener la certificación de la vigencia 2012.

Dicho proceso no se entiende como una actuación sancionatoria, por ello, las normas procesales que se deben aplicar al presente proceso de conformidad con el artículo 8º del Decreto 1639 de 2013, son las consagradas en el procedimiento administrativo general y no en el sancionatorio como en forma equivocada se pretende hacer ver.

La Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones, confiere a las autoridades del sector de servicios públicos la facultad de producir, unilateralmente, actos administrativos particulares y generales; por eso consagra reglas especiales sobre procedimientos administrativos, las cuales están previstas en los artículos 106, 115 y se relacionan con los actos de carácter particular y concreto que las autoridades pueden producir, como lo son las sanciones.

El artículo 79 de la Ley 142 de 1994, establece que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tiene las funciones de vigilancia, control y sanción de las empresas de servicios públicos domiciliarios; a su vez, el artículo 81 de la misma le consagra las sanciones que puede imponer la SSPD a los prestadores de servicios públicos domiciliarios.

Así las cosas, y debido a que la descertificación de los municipios no se encuentra señalada como una sanción de las que pueda imponer esta superintendencia en virtud del ejercicio de la facultad sancionatoria, se aplican las normas del proceso administrativo general y no las del proceso administrativo sancionatorio, se reitera.

Como corolario de lo expuesto, no son de recibo para esta entidad las afirmaciones realizadas por el impugnante en el sentido que *“sin haberse resuelto de fondo la solicitud de habilitación de los formatos del SUI, se resolvió expedir acto administrativo sancionatorio, violando con ello el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo. (...), por cuanto como ya se dijo, se expidió la resolución sancionatoria sin haber atendido hasta la fecha la solicitud de reversión del formulario (...)”*, por cuanto como quedó

demostrado, si bien la comunicación de habilitación de los formatos se efectuó por el Grupo SUI el 02 de octubre de 2013, la habilitación se había realizado en septiembre de 2013 y julio de 2013; y no sólo eso, sino que el acto administrativo de descertificación se expidió por esta SSPD el **20 de marzo de 2014**, es decir, cinco meses después de la comunicación de la habilitación y luego de más de seis meses de la habilitación de los otros formatos.

En conclusión, al haberse regido el proceso de certificación SPG-APBSB, vigencia 2012, por el proceso administrativo y no sancionatorio como lo afirma el municipio, sin que se violara el principio de legalidad alegado por el recurrente, este argumento no prospera.

#### Otras consideraciones.

Adicionalmente, y dado que el recurrente no presentó argumentos en contra de los criterios del reporte en el SUI del Acuerdo Municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva; ni del cargue del "Formato Balance entre subsidios y contribuciones"; ni del FUT en la categoría gastos de inversión el pago por concepto de subsidios en la vigencia 2012; ni de Reporte al SUI del acta de concertación de puntos y lugares de muestreo de conformidad con los lineamientos expedidos por el Gobierno Nacional sobre la materia; como tampoco el de reportar al SUI la solicitud suscrita por el municipio prestador directo y radicada ante la autoridad sanitaria competente, esta superintendencia reitera lo indicado en la Resolución No. SSPD SSPD 20144010007545 del 20 de marzo de 2014.

En conclusión, se evidencia que el ente territorial no acreditó el cumplimiento del requisito que se le demanda; por lo tanto el recurso formulado por el señor Arturo Arnulfo Robinson Dawkins, como alcalde municipal de PROVIDENCIA, no prospera y en consecuencia la Resolución recurrida se confirma.

Por lo expuesto,

#### **RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR** la Resolución No. SSPD 20144010007545 del 20 de marzo de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR** personalmente de la presente Resolución al alcalde del municipio de PROVIDENCIA, del departamento de ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

**ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR** el contenido de la presente Resolución al gobernador del departamento de ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**ARTÍCULO CUARTO.-** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra la misma no procede recurso alguno.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, D. C.



**JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO**

Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Ingrid Samantha Norato Vargas - Contratista Grupo de Certificaciones e Información  
Revisó: Nubia Stella Duarte Blanco - Contratista Grupo de Certificaciones e Información  
Aprobó: Giovanni Bonilla Rodríguez - Coordinador Grupo de Certificaciones e Información  
Visto Bueno: Samuel Alfonso Forero - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo  
Ángela López Villegas - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo  
Expediente: 20094016834480930A